



PRIVACIDAD >

Eurídice Cabañes: “El teléfono móvil es una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes”

La doctora en Filosofía y empresaria de videojuegos rechaza que se financie con dinero público infraestructuras de las grandes compañías



GUILLELMO VEGA

24 FEB 2021 - 23:30 CET



La filósofa y diseñadora de videojuegos Eurídice Cabañes, en una entrevista en Valencia, en marzo de 2018. **MÓNICA TORRES**

Eurídice Cabañes (Valencia, 1983) es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid *cum laude* mención internacional con la tesis titulada *La Tecnología en las fronteras*. Actualmente es CEO de la empresa de videojuegos Arsgames y profesora en el máster de Diseño Tecnopedagógico (e-learning) en la Universidad Isabel I de Castilla. En conversación con EL PAÍS a través de videollamada, Cabañes advierte sobre las consecuencias de lo que denomina “gobernanza algorítmica”, por la cual cada vez nos rigen más las tecnologías.

Pese a confesarse entusiasta de la innovación, no tiene teléfono móvil (“un espía que llevamos en nuestros bolsillos”) y reclama un mayor protagonismo de la filosofía e infraestructuras digitales públicas para asegurar la libertad y la igualdad de derechos de la “ciudadanía digital”. El año pasado publicó el libro *El aprendizaje en juego*.

Pregunta. Aparte del aspecto lúdico, ¿Qué pueden aportar los videojuegos para lograr una sociedad mejor?

Respuesta. Muchísimo. Por un lado hay una línea de los llamados *serious games* (juegos serios) que tratan que nos pongamos en la piel del otro, como por ejemplo en la de refugiados de guerra y en los que tenemos que vivir su huida y adaptación. Y otros que lo que intentan es que te pongas en la piel de personas en terapias hormonales por cambio de sexo.

Por otra, están los videojuegos que se pueden usar como formas de computación humana. Son juegos como *Eterna* que permite crear ADN sintético que puede ser la clave para la cura de innumerables enfermedades; o *Eyewire*, para el mapeo tridimensional de las neuronas cerebrales.

A mí, lo que más me interesa es el juego para alcanzar consensos, que al final consiste en decidir juntos las reglas que vamos a alcanzar, en los que podemos poner a prueba otros modelos y sistemas posibles, ya sean sociales, económicos o políticos. Creo que podríamos usar estas plataformas para lograr una democracia participativa total a través de entornos lúdicos. Con ellos, pueden decidir de una forma más consensuada cuestiones como presupuestos participativos o dónde va a ir la próxima parada del autobús. Y constituye una forma de ponerlos en prueba antes de aplicarlos al mundo real.

P. ¿Ha habido algún ejemplo de ello?

“El anonimato digital genera reacciones dañinas y machistas”

R. Hay algunos prototipos de esto que se podría llamar gobernanza lúdica, que se puede contraponer a la gobernanza algorítmica a la que estamos sometidos, con los algoritmos de las grandes corporaciones, o las ciudades inteligentes, que conllevan la privatización de la ciudad.

Dentro de [Games for cities](#) podemos encontrar países que han puesto en práctica juegos tanto digitales como analógicos para la gestión de ciertos elementos. Por ejemplo, tratar de lograr una economía circular o para solucionar cuestiones de movilidad. Desde Arsgames [la empresa que dirige] estuvimos trabajando con el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona y generamos una API que está accesible desde la página [Juegos del común](#) y que permite trabajar con datos abiertos con motores de juegos. Es decir, se puede jugar con datos reales a tiempo real, con lo que podemos manejar información, comprender los datos y, después, tomar decisiones.

P. Ha hablado de un concepto llamado gobernanza algorítmica. ¿Qué quiere decir exactamente con ello?

R. Estamos gobernados cada vez más por algoritmos que por personas. A todos nos suena el término *big data*, y cada vez tenemos más datos de nuestros perfiles en la red. Y todos esos perfiles se van sumando, e incluso se pueden generar perfiles por barrios, o por ciudades. Todo el concepto de las ciudades inteligentes se basa en que como una sola persona o varias son incapaces de analizar esa cantidad ingente de datos, hay que echar mano de algoritmos. De hecho, ya hay algoritmos que ya toman decisiones, como las cámaras que tienen reconocimiento facial, que podrían decidir quien puede ser detenido o no porque están cometiendo un delito.

Hay muchas decisiones públicas tomadas por algoritmos privados, dado que son las grandes compañías tecnológicas las que tienen las grandes bases de datos sobre nosotros y las que poseen los algoritmos que permiten gestionarlos. Lo que me parece más horrible de esta situación es que ni siquiera los propios gobiernos que los implementan saben cómo funcionan, porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual.

P. La tecnología se está imponiendo cada vez más en nuestras vidas. Entiendo por su respuesta anterior que no considera que las esté mejorando.

R. La tecnología puede mejorar muchísimo nuestras vidas. No soy antitecnológica. La tecnología me fascina y, de hecho, trabajo con ella. Pero creo que es una tontería ser protecnológico sin más, al igual que ser antitecnológico sin más. Lo que tenemos que desarrollar es un pensamiento crítico.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorítmica hay sesgos muy fuertes que ya se han detectado pese a las dificultades de acceder al algoritmo. Por ejemplo, con las mujeres, que son menos derivadas a tratamientos de cardiopatías. Lo que directamente causa muertes. O también aparecen mucho menos reconocidas en los algoritmos que analizan la relevancia académica o los algoritmos que seleccionan qué libros se van a publicar o no también dejan mucho más de lado a las mujeres.

También se ha visto en EE UU que a la población de color se le dirige menos a tratamientos médicos cuando tienen exactamente los mismos síntomas que personas blancas. Y todas estas cuestiones se retroalimentan, dato que se incorporan a las bases de datos.

P. Como doctora en Filosofía, ¿cree que hay que imponer algún tipo de límite de alguna forma a estas tecnologías? ¿Se usa la filosofía para atacar a este tipo de problemas?

R. La filosofía ahora es tremendamente importante. Parece que la tecnología es a lo que nos dirigimos, que lo importante es el desarrollo tecnológico, sin embargo, si solo nos concentramos en el desarrollo tecnológico, sin cabeza, no podemos anticipar los problemas que se van a producir. Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, no se sabía hasta qué punto íbamos a llegar una situación en la que estamos hoy en la que muy pocas compañías aglutinan muchísimo poder. Ya no solo económico, sino en lo que respecta al gobierno de nuestras vidas. La regulación es muy difícil, porque en Europa se tiende mucho a regular, pero se regulan sistemas algorítmicos que vienen de otros países, grandes trasnacionales que no se pueden saber exactamente cómo funcionan.

Creo que más bien lo que deberíamos hacer es dejar de pagar infraestructura privada para la educación pública, para los datos de sanidad o de seguridad que se encuentran en servidores privados y empezar a invertir en infraestructura pública. Con toda la cantidad de dinero que se ha destinado a pagar infraestructura privada se podría generar una infraestructura pública de calidad que garantizase la privacidad y la seguridad de los usuarios y que pudiese generar una tecnología pública que garantizase estos espacios que no existen hoy en día para construir ciudadanía digital. Partir de una infraestructura pública es por donde se debería empezar.

P. ¿Se está moviendo algo en ese sentido?

R. Hay bastante gente trabajando en ello. Existe un proyecto conjunto con el periodista Ekaitz Canela y el investigador Aitor Jiménez, que pretende estudiar la privatización encubierta que se está dando a través de estas infraestructuras digitales, cuyo alcance, en realidad, se desconoce. Para ello, hemos creado una herramienta para detectar contratos en el BOE y almacenar datos de qué cantidad de dinero, en qué sectores y en qué zonas se está invirtiendo dinero público en organizaciones privadas. Para que sirva, al menos, para visulizar la realidad.

P. ¿Cómo casa todo esto con la iniciativa privada?

R. Pero es que creo que hay cosas que se entiende que deben ser un procomún. Por ejemplo, el aire que se respira o el agua que bebemos. Actualmente, y más desde la pandemia, hemos constatado que internet ha de ser uno de esos recursos que han de ser un procomún porque son imprescindibles para garantizar otras cuestiones de los usuarios. Si es algo básico para garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que ser público y protegido.

P. ¿Por qué? Porque siento que es una tecnología tremendamente invasiva, una tecnología de espionaje que llevamos a todas partes.

Igualmente, la tecnología puede mejorar tremendamente nuestras vidas, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer gracias a internet. Pero lo importante es preguntarse a los intereses de quienes responden las tecnologías que usamos. Es importante que respondan a nuestros intereses, y es muy raro que haya tecnologías globales que estén respondiendo a los intereses de todo el mundo.

Muchas de las tecnologías que estamos usando solo responden a los intereses comerciales de grandes empresas, cuyo interés, evidentemente, es lucrarse. Debemos preguntarnos qué tecnologías vamos a usar y para qué fin.

P. ¿Cuáles son los grupos sociales o colectivos que se estén viendo más perjudicados por este avance de la tecnología?

R. En general, dentro de esta gobernanza algorí